



ASSUMPCIÓ VILÀ: “LA ORDENANZA DE CONVIVENCIA NO ES EFICAZ PARA PROMOVER EL CIVISMO Y CASTIGA INDEBIDAMENTE A LOS COLECTIVOS VULNERABLES”

La síndica celebra que el Ayuntamiento haya decidido empezar a trabajar en un replanteamiento de la norma; considera que es necesaria una profunda puesta al día de lo que hay que entender como sancionable a raíz de la promulgación de la Ley de seguridad ciudadana

Vilà plantea reconducir a las ordenanzas sectoriales las conductas infractoras que regula la Ordenanza de convivencia no incluidas en la Ley de seguridad ciudadana, con la exclusión de las conductas que tienen un origen en una problemática social

La defensora aconseja aplicar preferentemente medidas educativas y de trabajo en beneficio de la comunidad en todas las infracciones relacionadas con la convivencia

Barcelona, 14 de marzo del 2017. – “Después de una década en funcionamiento, ha quedado patente que la Ordenanza de convivencia no es eficaz para promover el civismo y castiga indebidamente a los colectivos vulnerables”, dice la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà. La síndica celebra que el Ayuntamiento haya empezado a trabajar en un replanteamiento de la norma y espera que el Gobierno consiga el máximo de consenso con el resto de grupos políticos para llevar a cabo los cambios necesarios.

Según la síndica, la Ordenanza de convivencia es una especie de código regulador de las diferentes actividades que pueden tener lugar en el espacio público. La norma establece los bienes jurídicos que se tienen que preservar y lo pretende hacer básicamente con multas a las personas que no los respeten.

Pero muchas de las infracciones que tipifica tienen como causa la desestructuración o exclusión social y situaciones de necesidad económica, lo que lleva a pensar que es un desacierto abordar estas cuestiones como si se tratara de un comportamiento voluntario y agresivo. “Desde hace años, el Ayuntamiento, lejos de encarar las problemáticas sociales visibles en el espacio público con medidas constructivas, se limita a aplicar penalizaciones, que en muchos casos son desproporcionadas”.

Desde la Sindicatura, se defiende que las políticas públicas que tiene que utilizar el consistorio para hacer frente a las problemáticas sociales tienen que ser de carácter preventivo y educativo. “No puedo estar de acuerdo con que se estigmatice a personas de determinados colectivos que sufren graves problemas de salud mental y/o económicos y que no se dé respuesta efectiva a estos problemas. Tampoco veo bien que se tilde de incívicas a personas menores de edad por conductas ocasionales que se pueden reconducir”, dice Vilà.

La Ordenanza de convivencia tiene una naturaleza transversal, y la mayor parte de las normas de conducta que se prevén pueden tener acogida en otras ordenanzas municipales. Vilà considera que es necesaria una profunda revisión y puesta al día de lo que hay que entender como sancionable y qué se tiene que abordar exclusivamente con medidas informativas, educativas y asistenciales.

Habrà que tener en cuenta la Ley de seguridad ciudadana

En esta revisión habrá que tener en cuenta que la Ley orgánica de seguridad ciudadana de 2015 reguló ex novo (por primera vez) una gran parte de conductas y la jerarquía normativa obliga a aplicarla por encima de la Ordenanza de convivencia, pero también deja bastante espacio a los ayuntamientos para trabajar las medidas de civismo y convivencia.

Así, las principales recomendaciones de la síndica sobre la Ordenanza de convivencia son:

1-Reconducir a las ordenanzas sectoriales las conductas infractoras que regula la Ordenanza de convivencia no incluidas en la Ley orgánica de seguridad ciudadana, con la exclusión de las conductas que tienen un origen en una problemática social.

2-Estudiar la conveniencia de sustituir la Ordenanza de convivencia por un código de buenas prácticas y divulgarlo sistemáticamente de forma pedagógica.

3-Aplicar sistemáticamente y preferentemente medidas educativas y de trabajo en beneficio de la comunidad en todas las infracciones relacionadas con el civismo.

4-Excluir de responsabilidad infractora a los niños menores de 14 años, sin perjuicio de la responsabilidad civil de padres, madres o personas tutoras (por los daños ocasionados).

5-Perseguir la reparación de los daños por incivismo en todo caso.

6-Poner en funcionamiento el Observatorio de la Convivencia con representación del Consejo de Ciudad (la síndica entiende que el Consejo de Ciudad es el órgano de participación que reúne las diversas sensibilidades cívicas y, por lo tanto, tiene que tener un protagonismo directo y permanente en la definición de los bienes jurídicos a proteger y la forma de hacerlo).

A lo largo de estos años la síndica ha supervisado decenas de casos vinculados con la Ordenanza de convivencia. Por ejemplo, entre el 2016 y hasta ahora se han supervisado 18 quejas, aunque éstas no son tan graves como las tramitadas con anterioridad.

Uno de los casos graves es de 2012, aunque el expediente se cerró un año después. Se trataba de una persona en situación de exclusión social, enferma y en tratamiento de desintoxicación, que llegó a acumular una deuda de cerca de 7.500 euros como a consecuencia de cerca de una setentena de sanciones, entre los años 2008 y 2012, por el incumplimiento de diferentes artículos, principalmente de la Ordenanza de convivencia: beber alcohol en la calle, tirar envases, dormir en la vía pública. Finalmente, después de la intervención de servicios sociales y de la defensora, a esta persona se le anularon las sanciones y fueron sustituidas por sesiones de atención social individualizada.

Otro caso, también del 2012, es el de un ciudadano afgano, que se encontraba en situación irregular en España, y que no podía volver a su país porque se vería obligado a entrar en el ejército. La imposibilidad de encontrar un trabajo hizo que tuviera que sobrevivir de los escasos ingresos que obtenía de la venta ambulante ilegal de productos no alimenticios. Llegó a acumular 177 sanciones y tenía una deuda con la hacienda municipal de unos 60.000 euros.

Vilà consideró que la actuación municipal había sido ineficaz y dio la razón al ciudadano. La síndica decía en la resolución que la situación descrita era bastante compleja e iba más allá de los procedimientos sancionadores impuestos. Y subrayaba que, con esta queja, quedaba patente la falta de eficacia de la Ordenanza de convivencia, ya que se había iniciado un elevado número de expedientes sin que fuera factible finalizarlos por medio del pago de las sanciones, a pesar de la carga que suponía la tramitación tanto para la Administración como para la persona afectada.

La síndica recomendó el sobreseimiento de los expedientes sancionadores, planteó reforzar las actuaciones preventivas para evitar las situaciones de vulnerabilidad y revisar, con carácter general, el importe de las sanciones con el fin de adecuarlos a la situación económica personal y a la ponderación adecuada del perjuicio causado en cada caso.

Menores sancionados

La Sindicatura ha supervisado también casos en los cuales la sanción se ha puesto a personas menores de edad. Particularmente grave, en opinión de la síndica, fue el de un menor de edad, en 2014, sancionado con 1.125 euros para subir con una bicicleta a una losa de hormigón en una plaza de Nou Barris. La persona que puso la queja fue la madre del sancionado, que expresó su disconformidad porque el chico no causó ningún daño en el mobiliario urbano ni a terceras personas y desconocía la prohibición.

La mujer acabó aceptando el pago reducido de la sanción, 525 euros, una cantidad que igualmente resultaba desproporcionada e inalcanzable dada la precaria situación familiar y al hecho que no se habían producido daños. Se trataba de una mujer viuda,

con dos hijos a cargo, que sólo cobraba la pensión de viudedad y un salario muy bajo de un trabajo que se le acababa. En la formulación de la queja, la reclamante expuso a la síndica que la sanción comportaba un perjuicio económico grave a la familia, y que planteó al Ayuntamiento de Barcelona la anulación de la denuncia, el pago a plazos y la sustitución por trabajos en beneficio de la comunidad, pero le fueron denegadas todas las peticiones.

La síndica dio la razón a la ciudadana, aunque el comportamiento denunciado no estaba permitido, porque no había habido proporcionalidad entre los hechos inocuos cometidos por el menor y la sanción aplicada. En el informe, Vilà decía que la multa comportó un resultado desmesurado y gravemente lesivo para la economía familiar en tanto que no se había producido ningún daño al patrimonio público ni a la convivencia ciudadana.

Vilà recomendó al consistorio la recalificación de la infracción como leve, que se acordara la conmutación de la multa por trabajos en beneficio de la comunidad atendiendo el principio del interés superior del niño, y que promoviera la revisión de la Ordenanza con respecto al tratamiento de los menores de edad y las infracciones graves para asegurar el cumplimiento de la finalidad de la norma en relación al carácter educativo y pedagógico.